

Masacre en Bagua: La República del Perú en la Curva del Diablo

Por Manuel Dammert Ego Aguirre

(La Masacre Indígena en Bagua, la crisis de la Republiqueta Lobysta de Alan García, y las Responsabilidades de la Nación)

Al Inicios del Siglo XXI, el 5 de Junio la masacre indígena y el asesinato de policías en Bagua, ha sido la ocasión utilizada por el Presidente Alan García para “inventar un enemigo”, lanzar su campaña mediática y evadir responsabilidades. Pretende justificar la imposición de su proyecto de Republiqueta Lobysta, para disfrazarla de “cruzada nacional anti-salvaje”. Ha desempolvado los rancios discursos del Siglo XIX, que contraponen civilización y barbarie, para tratar de justificar la masacre indígena, pero, sobre todo, para construir un “enemigo” que cubra el llamado a la “unión nacional”, y darle vistosidad sonora a la estrategia antidemocrática para imponer su republiqueta desnacionalizadora.

La masacre en Bagua, con numero desconocido de indígenas asesinados (las organizaciones indígenas señalan 25 o mas) y 24 policías asesinados, evidencia una crisis nacional profunda. No estamos ante una crisis de autoridad amenazada por una inexistente “insurrección” de indígenas alzados en armas. Es, ciertamente, una crisis derivada de las incapacidades administrativas de la Autoridad. Pero mucho más: es una crisis de la política desnacionalizadora del Gobierno, del Gabinete incapaz de atender la exigencia nacional. Pero nos quedamos cortos si nos detenemos en este análisis. Es una crisis mas sustantiva. Es la crisis de república, en la que se enfrentan los ciudadanos que luchan por la república democrática contra el proyecto de la republiqueta de lobystas que trata de imponer el gobierno neoliberal. Estamos en la crisis de una forma de organizar la República, pues ya no se pueden resolver las exigencias de ciudadanía en la actual restringida forma pública como ámbito de resolución de los asuntos comunes que nos corresponden a todos los peruanos.

Los indígenas amazónicos, en la defensa de sus territorios, asumidos como su piel y entorno básico de vida, han convocado al país a cambios ineludibles para una república democrática en una nación pluriétnica. Exigen dos cambios básicos. Hacen perentoria una política amazónica que supere el extractivismo depredador y, más bien reclaman el desarrollo territorial sustentable. Al mismo tiempo, han puesto en la orden del día la reforma política democrática, a fin que en la Estructura del Estado se reconozca nuestra ciudadanía diversa, en las autoridades y tradiciones étnicas, y en la gestión de territorios del Estado con los pueblos indígenas, como manda el Convenio 169 OIT.

Estamos todavía a tiempo para que una inmensa movilización nacional, pacífica, unitaria y firme, inclusiva, convocando a los diversos sectores de la ciudadanía, logre abrir curso a estos cambios democráticos. Podemos todavía evitar se imponga la estrategia, de raigambre colonial, de la republiqueta de lobystas, de exclusión estructural y anulación como pueblos de los indígenas, que hundiría al país en un grave enfrentamiento estructural del Estado con sus ciudadanos, entre ellos los pueblos indígenas, y en la pérdida de nuestra principal renta estratégica del siglo XXI, la Amazonía. Podemos aún evitar esta pendiente, que conduce a que el Perú sea desnacionalizado, y pierda su democracia.

1. La Republiqueta Lobysta del Siglo XXI, y la creación del “enemigo” con la “cruzada nacional anti-salvajes” de García

Carmen Mac Evoy acuñó la frase “República Militar-Guanera”. Se refería a ese remedo de Republica impuesto en el Siglo XIX. Fue una Republica del exclusivismo criollo, de una elite que asaltaba el Estado para enriquecerse, y que se afirmaba en la exclusión colonial de la mayoría de peruanos. El fulminante calificativo, reúne el chasquido del látigo con la fuerza de la denuncia, para evidenciar los podridos fundamentos de la corrupción oligárquica, que hizo del asalto a las arcas fiscales y a los recursos naturales, el origen de sus fortunas hechizas.

Ahora García, a inicios del Siglo XXI inventa al “enemigo” que le permita “unir a la nación”, con su “cruzada nacional contra el salvajismo indígena”. Esta burda maniobra la hace en un momento de grave crisis política a mitad de su Gobierno. García en estos dos años ha logrado reconcretar el poder del Estado en un Hiper-Presidencialismo Autoritario. Pero es un poder sustantivamente débil, pues está realmente aislado de la mayoría ciudadana y de las diversas fuerzas sociales, y la institucionalidad democrática le es una traba para sus pretensiones.

García reconcentró este Hiper-Presidencialismo para su proyecto de Republica Lobysta, que denomina también del “perro del hortelano”. Es decir, imponer la degradación del país en un páramo económico, sin industria ni agricultura ni logística integrada, nación descuartizada reducida a mero lugar de circulación de mercancías en transito globalizado, sin mercado nacional. Las riquezas de recursos naturales (bosques, biodiversidad, energía, minas, pesca, etc) se subastan y entregan a multinacionales para repetir el extractivismo exportador y depredador. Las rentas de un país así sometido y descuartizado, son las ganancias que dejarían los flujos del comercio y del modelo primario exportador en manos de lobystas, que además están activos en asaltar las que quedan en el Estado, para formar una neo-oligarquía, de la que algunos se aprestan a formar parte desde los resortes del poder político.

2. Ante su aislamiento y crisis, García lanza su ofensiva, que combina represión, “cruzada” y reparto, para imponer su Proyecto de Republiqueta Lobysta, poniendo en grave peligro a la democracia nacional.

García tiene serios problemas estratégicos para imponer su Proyecto que es contrario a la nación y lesiona a la ciudadanía.. En la coyuntura actual se le han juntado cuatro asuntos públicos de primer orden: crisis económica; crisis en el sector energía y la guerra del petróleo evidenciada en los petroaudios; la fallida toma del Canal 5 por Sunat-Gobierno; y la resistencia indígena amazónica a la subasta de la amazonía, que es pieza clave del afán lobysta. Estos cuatro aspectos estallaron en forma simultánea, e hicieron más grave la crisis política de un Gabinete de fachada, y del aislamiento de García y su republiqueta lobysta.

Todo indica, que ante esta crisis, García busca una resolución estratégica a favor de su proyecto, atacando en los cuatro frentes el mismo tiempo. Se presenta como el “gran elector” del 2011, bloquea demandas ciudadanas, y oferta reparto de activos públicos, canonjías y cargos. Necesitaba golpear al conjunto del sistema político y social, y

desplegar con mayor intensidad las acciones para instalar los privilegios y prebendas de su republiquetá. Para esto, “crea el enemigo”, que colocado “fuera del sistema” le permita “unir a la nación”. Esta vieja treta de las dictaduras, ha sido usada muchas veces, inclusive contra el Apra. Ahora, García, neoliberal desnacionalizador, decide usarla en su “cruzada nacional anti-indígenas salvajes”, y colocar en el centro de la atención mediática la lucha contra un supuesto “complot extremista” del “salvajismo indígena amazónico”, que buscaría destruir la democracia, ante lo cual convoca la “unión nacional”. En este contexto se produce la masacre de Bagua, que presenta la ocasión para tentar en al curva del diablo esta resolución estratégica de la crisis. Analicemos cada uno de estos cuatro aspectos.

Primero, su política económica de continuismo neoliberal se ha agotado, pues la crisis mundial ha cambiado el ciclo expansivo de la economía nacional y ya entramos en recesión, ante la cual es obligado volver los esfuerzos al mercado nacional. La subasta antinacional tiene reducidos postores, afectados de restricciones de liquidez, los que exigen más favores y privilegios del Estado. Estas dificultades, lo obligan a ganar tiempo, disciplinando el reclamo de la población. Pero, en el corto plazo, precipita la inmediata privatización de activos públicos y la subasta de las riquezas naturales. Entre estas decisiones, acelera la ilegal destrucción de los puertos públicos de Enapu para imponer Monopolios privados, como ocurre en Paita y se encamina en Callao y en los otros puertos públicos.

Segundo, los temas de los Petroaudios y de la venta de Petrotech, siguen orillando el gobierno, y están solo congelados pero no anulados en el poder judicial. Estos temas emergen con fuerza y evidencian su relación de corruptela, ante los primeros síntomas de la crisis energética y del inicio de la antinacional exportación del Gas de Camisea a México-Chile desde el 2010, operación esta última en la cual existen mas de 14 mil millones de dólares en sobre-utilidades en un contrato tramposo en el lote 56. Ante este peligro que se una la crisis energética con la corruptela de los petroaudios, presiona a fin de silenciar a los críticos, como la búsqueda de inhabilitación de Herrera Descalzi, Decano del Colegio de Ingenieros. También, se da la anunciada condena judicial contra mi persona, para este Jueves 11 de Junio, por haber supuestamente difamado a PPK al denunciar sus actividades lobystas en los casos de privatización de puertos y exportación de Gas de Camisea, cuya faena el Gobierno quiere ahora redondear. El Gobierno adopta medidas para asegurar la faena de exportación del Gas de Camisea por Repsol, y da pasos para legalizar la entrega ilegal del lote Z2B, que corresponde a Petroperu, como activo incluido en la venta de Petrotech. La vigencia de la institucionalidad democrática, no permite que se hagan todas las tratativas y corruptelas de la republiquetá de lobystas, por lo que debe ser cercada la crítica, impedida la acción fiscalizadora, y anulado el sistema de control público.

Tercero, García dio el zarpazo para que el Gobierno sea un actor clave en el espacio mediático, con la intervención de Sunat a Canal 5 como “administrador”. Pretendía construir un escenario chillón e intolerante, con un fascista en el canal ahora pro fujimorista, y otra fascista en el canal que iba a controlar. Pero el zarpazo no duró un par de días. La Sunat fue percibida como cancerbera de las deudas empresariales, y la institucionalidad percibió la destrucción de la democracia tras las capuchas mediáticas. Pese al retiro del zarpazo intervencionista, sigue terca la voluntad por otro curso, a fin de lograr los mismos objetivos, haciendo que Sunat designe en junta de acreedores la conducción empresarial. Días antes de la masacre en Bagua, ya estaba en camino la

censura parlamentaria al Gabinete por este caso, lo que abría un giro insospechado en el gobierno. La masacre de Bagua es lo que cambia el escenario general de fuerzas, y esta censura queda relegada y en suspenso.

3. Todos somos Amazónicos: La lucha indígena, una movilización ciudadana convocante, plural, pacífica, con alternativas, llevada por la masacre de Bagua al desborde y la violencia.

El cuarto tema es el de la arremetida del Gobierno para subastar los territorios de la amazonía, incluyendo los de los pueblos indígenas. Este es uno de los ejes claves del proyecto de la Republicueta lobysta. La amazonía, como señala Roger Rumrill, es nuestra renta estratégica nacional y cuenta con estratégicos recursos: petróleo y gas, minerales, biodiversidad, bosques, agua dulce. García busca privatizarlos todos, y entregarlos a empresas transnacionales extractivistas, para lo cual debe pisotear los derechos de la nación en la amazonía y en especial despojar a los pueblos indígenas amazónicos en sus territorios, no solo de tierras cuyos derechos de propiedad deja imprecisos, sino sobre todo por la masiva entrega privatizada que modifica la condición de suelos, agua y bosques, expulsan a los pueblos indígenas al hacerles imposible vivir en los territorios depredados.

Desde el inicio de este Gobierno, en su reconversión neoliberal, era indudable que García diseñaba este enfrentamiento bajo los términos de la pugna “civilización/barbarie”, por lo que estaba dispuesto a ejecutar lo que fuere necesario. Dio una muestra de esta voluntad cuando hizo uso ilegal de la facultad delegada por el Congreso para legislar sobre el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y dicto diversos decretos legislativos inconstitucionales que alteran el régimen de propiedad, usos de suelo y gestión de recursos en la amazonía. Estos DLs pisoteaban la obligación constitucional de previa consulta con los pueblos indígenas, como manda el Convenio 169 de la OIT, que es norma constitucional en el país.

García esperaba una respuesta sectorial, reactiva y aislada de los indígenas amazónicos, para atacarlos como una “minoría salvaje” que se oponía al progreso civilizatorio de la nación. Pero la respuesta de los pueblos amazónicos, indígenas y mestizos, no cayó en su juego, sino que mas bien luego de casi año y medio, lo aisló y convocó a un amplio respaldo nacional.

La estrategia de lucha indígena amazónica en este año y medio es necesario apreciarla en su práctica. Ella estuvo basada en plantear sus demandas a nivel de un reclamo sobre la Republica, no solo sobre un asunto sectorial reivindicativo. Y lo hacían, pues al arrasar los DLs con los territorios indígenas, acababan con ellos como pueblos, los despellejaban literalmente, al afectar sus recursos de sobrevivencia, su espacio de vida, sus vínculos sociales, su cultura. Este fundamento no es un tema inventado por los indígenas amazónicos; es la base de los acuerdos de Naciones Unidas para los pueblos indígenas del planeta, que está incorporado en el Perú como norma constitucional. Los indígenas amazónicos planteaban, por ello, la defensa y afirmación del Estado de Derecho, mientras que la política de los DLs del Gobierno pisoteaba los mandatos de la Constitución y el Estado de Derecho.

A largo de mas de un año, la lucha indígena amazónica se afirmó en una movilización ciudadana de características singulares. Es el primer levantamiento ciudadano

amazónico de la historia republicana, por el carácter básico de subsistencia como pueblo. Luego de más de 500 años, es la primera movilización indígena organizada en la nación desde sus etnias, actuando en forma conjunta y tras objetivos acordados. La unidad se hacía sin perder la diversidad de las etnias, sea en sus distintas costumbres y formas de gestionar el bosque; en sus tradiciones, como las de aquellas más guerreras, que incluso han sido licenciados del Ejército; y en sus niveles de vínculos con el Estado, en la educación, las redes de salud e incluso en la representación en los gobiernos municipales.

La movilización era convocante al conjunto de la nación y a la defensa de derechos internacionalmente reconocidos. Desde el inicio se posicionó en este nivel, y por ello superó el aislamiento que buscaba el gobierno, y más bien se ha visibilizado con legitimidad ante la mayoría del país. Su trato era plural, reuniéndose con diversos sectores políticos e institucionales, con partidos diversos, con las distintas bancadas, y con instituciones como la Defensoría del Pueblo. Tenía alternativas, de la más alta modernidad del desarrollo sustentable, desde las que enfrentaban al extractivismo depredador. El Gobierno estaba descolocado ante un adversario que suponía “salvaje”. Incluso, pese a diferentes ideas al respecto, la posición de algunos grupos amazónicos, en su trato con empresas petroleras y mineras, era que debían ser consultados primero con ellos, y en donde fuese compatible la actividad con el desarrollo sustentable ellos no solo no se oponían sino que querían ser socios. Esta lucha amazónica ha sido también básicamente pacífica. Se fue desplazando en toda la amazonia y llegando a las ciudades, vías de comunicación y áreas de distribución de gas y petróleo. Sus manifestaciones eran de protesta, con plantones y bloqueos, en constante negociación con las fuerzas policiales, como se hace en todo el país. Era indudable que existía un acuerdo básico entre todas las etnias de este carácter pacífico, pues ante las ignominiosas y humillantes medidas, ninguneos, atrasos, burlas y desplantes del gobierno y su bancada parlamentaria, no recurrieron a actos de violencia a lo largo de casi un año y medio de lucha.

Gracias a estas condiciones de su lucha, el año pasado lograron la derogatoria de dos DLs y la formación en el Congreso de una Comisión para pronunciarse sobre los DLs, así como el compromiso del poder ejecutivo de instalar una mesa de diálogo. Suspendieron la lucha y la volvieron a reiniciar, ante el incumplimiento del Gobierno, obstinado en dividir a los indígenas para mantener a toda costa los DLs inconstitucionales. Cuando reinician su lucha, habían logrado dos avances claves: afianzado su organización nacional de etnias indígenas, y posicionaron el reclamo indígena amazónico como tema del conjunto de la ciudadanía. De este modo, estando más fuertes ante el gobierno, en ambos lados se empezaban a mostrar tendencias de patear el tablero, pero aisladas y minoritarias en el movimiento indígena, mientras se hacían más fuertes en el gobierno y la bancada del APRA en el Congreso.

Los días previos a la masacre, tras 54 días de reinicio de las movilizaciones, la lucha indígena amazónica estaba a punto de obtener una clara victoria parcial. En el Congreso, la Comisión Especial Multipartidaria, que se formó el año pasado, bajo la Presidencia de la Congresista Gloria Ramos, ya se había pronunciado por la derogatoria de los cuestionados DLs. También lo hizo la Comisión de Constitución del Congreso, aprobando el Informe presentado por el Congresista Daniel Abugattas. Ya se habían pronunciado las distintas bancadas, y era claro que había una mayoría parlamentaria por la declaración de inconstitucionalidad y derogatoria del principal de los DLs, por no

haber sido consultados a los pueblos indígenas. Incluso, la Defensoría del pueblo, presentó un informe y una acción de inconstitucionalidad en el mismo sentido ante el Tribunal Constitucional. En las calles, crecía la movilización de los diversos sectores en respaldo a la exigencia de los pueblos indígenas, con diversas acciones locales, regionales y nacionales. El reclamo indígena amazónico se había transformado en una bandera nacional de lucha popular y nacional.

No había sido fácil ni se habían dejado de cometer varios serios errores a lo largo de esta compleja lucha ciudadana. El más grave, fue cuando la palabra protesta fue reemplazada por “insurgencia”, lo que rápidamente fue aclarado y rectificado, tras la toma de distancia de las bancadas diversas del congreso y luego de una importante intervención al respecto de la Defensoría del Pueblo.

Los intentos del gobierno y su bancada parlamentaria de dividir, contraponer, satanizar, estigmatizar, mecer, cansar, exasperar, fueron derrotados uno a uno. El país estaba a punto de dar paso a un acuerdo nacional, que al derogar los DLs inconstitucionales y cumplir las normas de la OIT, iba a significar empezar una sustantiva reforma política de nuestra república, afirmándose la ciudadanía de todos los peruanos y el desarrollo sustentable de la nación.

Pero no ocurrió así. El Gobierno atravesaba ya una crisis más amplia, y estaba jaqueado políticamente al fracasar la intervención de Sunat en Canal 5 de TV. Debía afrontar una censura al Gabinete, que ya todas las bancadas, a excepción del Apra, habían manifestado iban a respaldar. En el Parlamento, la bancada del APRA logra bloquear que en el Congreso se trate los dictámenes derogatorios, y envía el asunto para que sea visto previamente por una fantasmal “Comisión de Diálogo”, que el Poder Ejecutivo demora casi seis meses en formar y que no dialogaba ni tenía autoridad efectiva. Al día siguiente, se produce en este contexto, la masacre en Bagua, y se desata con ella la contraofensiva para imponer la republiqueta lobysta.

No se tiene hasta la fecha información completa de lo ocurrido en Bagua el 5 de Junio. Pero es indudable que la población indígena, que bloqueaba por varias semanas la carretera marginal en la Curva del Diablo, fue inicialmente atacada con bombas lacrimógenas y con disparos al cuerpo. Son mudos testigos los cadáveres llenos de balas y el sonido de las imágenes de TV de ese momento. Estos disparos al cuerpo no eran en respuesta a que alguien hubiese atacado, como se ha insinuado sin prueba alguna de una “columna armada”. Todo indica que así empezó la masacre.

Esta acción solo podía llevar a un precipicio de desbordes y mayor violencia, era echar gasolina al fuego. Es público y conocido que muchos habitantes de las etnias de Amazonas y Loreto han sido licenciados del Ejército, en especial, en la llamada guerra del Cenepa con el Ecuador; son pueblos reconocidos por su larga tradición guerrera. Atacados, algunos han respondido con actos violentos, incluyendo asesinatos de policías, en medio de la turba y en algunas otras zonas aisladas, como en la estación de Petroperu. No puede negarse el carácter asesino de este acto, y es clara su condena. Pero una pregunta es indispensable a ser respondida: ¿Fue una provocación premeditada para obtener una respuesta desbocada de algunos sectores aislados de los pueblos indígenas con el lamentable asesinato de policías? Lo dirán las investigaciones independientes que deben realizarse.

El mismo día de la masacre, el Gobierno despliega una campaña intensa, convocando al país a unirse contra el “extremismo salvaje” de los indígenas y sus instigadores internacionales. No se informa de los indígenas muertos y de los dirigentes heridos. Solo se difunde los honores a los policías asesinados. Los Ministros anuncian que no renunciarán, pese a que las diversas fuerzas de oposición reclaman su renuncia. El alucinado discurso del Presidente de la República del 7 de Junio, en los actos militares, va a quedar en la historia patria como una pieza de antología. Llama a “la nación” a unirse para enfrentar el salvajismo indígena y la intromisión externa, y despliega los términos de su contraofensiva estratégica para imponer autoritariamente la república lobysta, El desvarío Presidencial resume y expresa, en el marco del dramatismo de horas infaustas para el país, la envergadura de la crisis de la república y la nación.